

	Trimestre.	Semestre.	Ano.
En Madrid.	10 rs.	20	30
En las provincias.	12	24	36
En el extranjero.	14	28	42
En las Antillas.	16	32	48
En Filipinas.	18	36	54

Mientras las atenciones del periódico no lo impidan, se admitirán remisiones y descuentos a precios convencionales, y anualmente a medio real la línea.

EL ECO DE ESPAÑA se publicará todos los días, excepto los lunes y las grandes festividades del año.

EL ECO DE ESPAÑA.

PERIÓDICO MODERADO.

MADRID.—SÁBADO 12 DE MARZO DE 1870.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la Administración y Redacción de este periódico, calle del Caballero de Gracia, número 40, principal.

El importe de la suscripción en Madrid se abonará en efectivo en la Administración. En el de las provincias, o por medio de libranzas del Giro postal, o de los correos, y también por letras de crédito, o de la Administración de la Administración; de esta última manera o bien haciendo el abono en efectivo en la Administración, se servirán las suscripciones de Ultramar, el importe de las suscripciones que se envíen por cualquiera clase de giro, se hará por medio de carta certificada.

NÚM. 27.

AÑO I.

PROYECTO DE LEY DE ORDEN PÚBLICO.

TÍTULO I.

Del estado de prevención y de alarma.

CAPÍTULO PRIMERO.

SECCIÓN PRIMERA.

Artículo 1.º Las disposiciones de esta ley son únicamente aplicables promulgada que sea, la ley de suspensión de garantías a que se refiere el art. 31 de la Constitución, y esas desde luego cuando las Cortes levanten aquella suspensión.

Art. 2.º Son objeto de esta ley: 1.º Las medidas gubernativas que las autoridades civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el orden público, prevenir los delitos contra la Constitución del Estado, contra la seguridad interior y exterior del mismo, y el orden público, que la vigente ley penal condena.

2.º La competencia y procedimiento de los jueces y tribunales en las causas criminales que se formen sobre dichos delitos.

SECCIÓN SEGUNDA.

Art. 3.º Publicada la ley de suspensión de garantías a que se refiere el art. 1.º, se considera declarado por el mismo hecho el estado de prevención, hallándose facultada desde este momento la autoridad civil para adoptar cuantas medidas preventivas y de vigilancia concepte convenientes a fin de asegurar el orden público.

Art. 4.º La autoridad civil excitará por oficio a la judicial, para que proceda desde luego contra los que comprenda que son responsables, en algún sentido, de los delitos expresados en el art. 2.º

Art. 5.º Si se formasen grupos, dictará las medidas oportunas para su disolución, intimando a los autores y auxiliares de la agitación que se disuelvan, y en el caso de no ser obedecida, al efecto de restablecer la calma y dejar expedita la vía pública.

Art. 6.º Propondrá el gobierno, y en caso urgente acordará desde luego, la suspensión de las publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de los delitos de que habla el art. 2.º de esta ley, y señaladamente los comprendidos en los artículos 167 y 174 del Código penal, dando cuenta al gobierno de las determinaciones que sobre este punto adopte. Recogerá los ejemplares que encontrare de ellas, remitiéndolos con los responsables de los delitos expresados al juzgado ordinario competente para los efectos de justicia.

Art. 7.º La autoridad civil, en este estado, podrá detener y detendrá a cualquiera persona cuya detención considere necesaria para la conservación del orden.

Los detenidos en esta forma no deberán confundirse con los presos y detenidos por delitos comunes.

Art. 8.º Podrá asimismo compelir a mudar de residencia a domicilio a las personas que considere peligrosas, o contra las que existan racionales sospechas de participación en dichos delitos.

El cambio de domicilio no podrá decretarse a más de 150 kilómetros de distancia del pueblo del compendio a mudarse, y a más de 100 de la residencia anterior.

Art. 9.º El destierro, que desde luego puede acordar la autoridad a una distancia que no exceda de 250 kilómetros, como el cambio de domicilio, se entiende levantado de hecho y de derecho terminado el período de la suspensión temporal de las garantías constitucionales, si antes no fueren alzados.

Los motivos de las providencias a que se contrae este y los tres anteriores artículos, se harán constar en acta que se levante, o expediente que se forme antes o después de llevarlos a ejecución.

Art. 10.º La autoridad civil podrá también entrar en el domicilio de cualquier español o extranjero residente en España sin su consentimiento, y examinar sus papeles y efectos. Pero esto, no puede verificarse sino por la misma autoridad o por un delegado suyo, y con orden formal y por escrito de aquella. En uno y otro caso el reconocimiento de la casa, papeles y efectos, tendrá lugar siempre en presencia del dueño o encargado de la misma, o de uno o más individuos de su familia, y dos vecinos de la propia casa o de las inmediatas si se hallasen en ellas, y en su defecto, dos vecinos del mismo pueblo.

No hallando en ella al dueño o encargado de la casa, se hará el reconocimiento a presencia de dos vecinos únicamente, levantándose acta del reconocimiento, que firmará la autoridad o su delegado con estos.

Cuando un delincuente contra el orden público fuese sorprendido in fraganti delicto, y perseguido por la autoridad civil o sus subordinados o dependientes, se refugie en su propio domicilio, o en el ajeno, podrá estos penetrar en él para solo el efecto de su aprehensión.

Art. 11. Los deberes y atribuciones de la autoridad en el estado de agitación, alarma, desorden o tumulto, se subordinarán a lo que prescriben esta ley y el artículo 181 del Código penal.

Art. 12. Si la autoridad civil, empleados todos los medios de que en circunstancias ordinarias dispone, y los que para las extraordinarias le otorgan los precedentes artículos, no pudiese por sí sola, o auxiliada por la judicial, dominar la agitación y restablecer el orden, lo prevendrá en un bando, que se publicará con la solemnidad posible, e inmediatamente después dispondrá que la militar proceda a la adopción de las medidas que reclama la paz pública, previa la declaración del estado de guerra.

Art. 13. Cuando la rebelión o sedición se manifieste desde los primeros momentos, rompan el fuego los rebeldes o sediciosos, o comprenda la autoridad civil la urgente necesidad de apelar a la fuerza y resignar el mando para dominarlos, se pondrá de acuerdo con la autoridad judicial y militar, y dispondrá inmediatamente la declaración del estado de guerra.

Si no hubiera acuerdo entre estas autoridades, ni tiempo para tomarlo, se entrará desde luego provisionalmente en el estado de guerra en los dos primeros casos del párrafo anterior, dando directamente cuenta de todo al gobierno, y a las autoridades superiores jerárquicas respectivamente.

Art. 14. Si ocurriese la rebelión o sedición en capital de provincia, la autoridad civil para los efectos del artículo anterior lo será el gobernador de la misma o el que haga sus veces, y las autoridades judiciales y militares, las superiores en el orden jerárquico. En los demás pueblos se reunirán para dicha declaración el juez de primera instancia, o el decano si hubiese más de uno, el alcalde popular y el jefe militar que ejerza el mando de las armas.

En el caso de que en dichos pueblos no existiese autoridad militar que ejerza el mando de las armas, el alcalde popular, jefe superior de la milicia, asumirá las facultades que corresponden según esta ley a la autoridad militar en el estado de guerra.

Art. 15. En la capital de la monarquía y puntos donde residan el rey o la regencia del reino, no podrá declararse el estado de guerra sin autorización del gobierno. El gobierno, cuando hayan ocurrido actos de rebelión o sedición en dos o más provincias, o se hayan presentado grupos considerables de rebeldes o sediciosos armados en ellas, determinará el territorio que queda sujeto al estado de guerra.

CAPÍTULO II.

Art. 16. Recibida por la autoridad judicial la comunicación a que se refiere el art. 4.º de esta ley, o sin recibirla, si tuviere conocimiento de los sucesos antes de que llegue a su poder, el juez o jueces de primera instancia de la población donde ocurran aquellos, dando cuenta al regente de la audiencia, se constituirán en sus juzgados, acompañados de los promotores fiscales respectivos y del escribano que designen, aunque no esté en turno, pudiendo valerse de él o de otro durante el procedimiento, si creyeren exigirlo la administración de justicia.

Art. 17. Inmediatamente formarán los jueces la correspondiente causa sobre delitos contra el orden público, y los de rebelión y sedición si hubiere méritos para ello, dedicándose exclusivamente a este servicio preferente, a cuyo fin, si lo creyeren necesario, delegarán la jurisdicción para los demás negocios en el juez de paz que corresponda.

Art. 18. Darán aviso sin pérdida de tiempo a la autoridad civil de hallarse constituido en tribunal, ofreciéndole su cooperación, y de estar formando causa sobre los sucesos que hayan producido la alarma o el desorden, reclamándole los datos que crea convenientes para la pronta averiguación de los hechos criminales que sean objeto del procedimiento.

Art. 19. Si los delitos contra el orden público ocurriesen en punto donde exista la audiencia territorial, se constituirá en sesión permanente la sala de gobierno en el punto que el regente designe, adoptando los acuerdos oportunos para la pronta sustanciación de las causas.

En otro caso, los regentes dictarán las órdenes convenientes al propio fin a los jueces que conozcan de estas causas, dando cuenta de aquellas a la sala de gobierno para su aprobación o reforma. A este propósito la referida sala se reunirá diariamente a las horas que el regente señale, y hasta tanto que crea innecesaria esta reunión.

TÍTULO II.

Del estado de guerra.

Art. 20. Resignado el mando por la autoridad civil en la militar, y en los casos a que se contrae el art. 13 de esta ley, quedará declarado en estado de guerra el territorio de la provincia en que ocurran aquellos sucesos, lo que se hará saber al público por medio de bandos y edictos que contengan las prevenciones y medidas oportunas.

Art. 21. En dicho bando se intimará a los rebeldes o sediciosos y perturbadores que depongan toda actitud hostil, y presten obediencia a la autoridad legítima. Los que lo hicieren en el término que el bando fije, y no señalando, en el de dos horas, quedarán exentos de pena, excepto los autores o jefes de la rebelión, sedición o desorden, y los reincidentes en estos delitos.

Los autores y jefes referidos serán indultados de la pena que les corresponda, caso de rendirse en el tiempo que expresa el párrafo anterior, y sufrirán la inmediata inferior en su grado mínimo al medio. Los reincidentes quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad por el hecho de serlo.

Art. 22. Publicado el bando, y terminado el plazo que en él se señale, disolverá a todo trance los grupos que se hubieren formado, empleando la fuerza, si fuere necesario, hasta reducirlos a la obediencia, prendiendo a los que no se entreguen, y poniéndolos a disposición de la autoridad judicial cuando deban ser juzgados por ella, en la forma que se expresará.

Se consideran como presuntos reos de criminalidad los que se encuentren o hubieren estado en los sitios o calles donde haya habido combate durante este, o dentro de las casas en que se hayan alojado y hecho fuertes los rebeldes o sediciosos; pero podrán probar su inocuidad o inocencia los que se hallaren en tal situación. Y en el mismo caso se encuentran los que reunidos a los rebeldes o sediciosos sean aprehendidos huyendo, o escondidos, después de haber estado con ellos.

Los habitantes de las casas a que este artículo se refiere, no se considerarán presuntos criminales por el hecho de hallarse en ellas, cuando las hayan ocupado los rebeldes o sediciosos; pero si apareciese haber tenido participación en el delito, sufrirán la pena correspondiente según su criminalidad.

Art. 23. Los delitos comunes cometidos en una rebelión, sedición u otro desorden público, serán castigados conforme a lo dispuesto en el Código penal, sin perjuicio de serlo por estos.

Cuando no puedan ser descubiertos sus autores, serán considerados como tales los jefes principales de la rebelión o sedición; si no estuviese organizada con jefes reconocidos, lo serán los que lleven la voz por los rebeldes o sediciosos, o ejerzan otros actos en su representación, y si se cometiesen por alguna fuerza destacada del grueso de los rebeldes o sediciosos, no apareciendo sus autores, será responsable de ellos el que mande dicha fuerza.

Art. 24. Todo funcionario o corporación, cualquiera que sea su autoridad o cargo, prestará inmediatamente a la autoridad militar como a la civil el auxilio que estas le pidan para sofocar la rebelión o sedición, y restablecer el orden.

El funcionario referido que no prestase inmediato auxilio a la autoridad superior militar o civil, será en el acto suspendido de su empleo o cargo, y reemplazado en él interinamente hasta la resolución del gobierno, a quien se dará cuenta al efecto; todo sin perjuicio de las penas que incurran por consecuencia del procedimiento que se instruya para depurar su responsabilidad o irresponsabilidad criminal.

Art. 25. Las autoridades civiles continuarán funcionando en todos los asuntos propios de sus atribuciones que no se refieran al orden público, limitándose respecto a éste a las facultades que la militar les delegare o deje expeditas, debiendo en uno y otro caso darle directamente los partes y noticias que los reclame, y las demás que con referencia al orden público lleguen a su conocimiento.

Art. 26. La autoridad militar, a la vez que adopte las medidas comprendidas en los artículos precedentes, y que restablezca el orden y el prestigio de la autoridad, a todo trance, dispondrá que inmediatamente se instruya la causa a que haya lugar, y se formen los consejos de guerra que han de fallar las que correspondan a la jurisdicción militar, según lo que expresan los artículos siguientes.

Art. 27. Los consejos de guerra ordinarios fallarán las causas en que, siendo la rebelión de carácter militar, aparezcan reos de estos delitos o sus auxilios, militares de mar y tierra en activo servicio, cualquiera que sea su situación y categoría.

Se considerarán aquellas de carácter militar cuando los rebeldes o sediciosos estén mandados por jefes militares, y cuando el movimiento se inicie o sostenga por fuerzas armadas del ejército o milicia popular armada.

Art. 28. También quedan sujetos a la jurisdicción de los consejos de guerra ordinarios, con arreglo a ordenanza, los jefes, los oficiales de la milicia popular armada o los que en su defecto y de cualquier modo hagan veces de tales, y los rebeldes o sediciosos que en número mayor de doce individuos se levantasen en armas o sostuviesen con ellas la bandera de la rebelión y sedición en despoblado, si fuesen aprehendidos por fuerzas públicas, sean o no del ejército permanente, destinadas a su persecución, ya por las autoridades militares como por las civiles.

Los jefes principales de una rebelión o sedición armada, de carácter no militar, durante el período de guerra, quedan también sujetos al consejo de guerra ordinario, y si no estuviese organizada, serán considerados como tales los que en este caso expresa el artículo 23 de esta ley, párrafo segundo.

Art. 29. Todos los demás milicianos populares armados, como los que se pertenecen a la milicia popular tomen armados parte en una rebelión o sedición en una población, sean aquellas o no de carácter militar, si hicieren resistencia a las fuerzas públicas, serán juzgados y sentenciados también por el consejo de guerra ordinario, siguiéndose en el procedimiento los trámites que señalan las ordenanzas militares y disposiciones especiales que lo determinan.

Pero en lugar de siete vocales militares constituirán este consejo cuatro capitanes nombrados por la autoridad militar, el juez de primera instancia, el de paz, y el promotor fiscal más antiguo en el pueblo cabeza de partido judicial donde el consejo se celebre, o quien haga sus veces. Si el juez de paz no fuese letrado le reemplazará el suplente en orden que lo sea.

Si no le hubiere, asistirá al consejo el juez de paz o suplente letrado del año o años anteriores, y no habiéndolo, el abogado más antiguo del pueblo donde se celebre.

Será presidente del consejo el vocal que, según las leyes civiles y militares, fuere de mayor categoría. Y si sobre ello hubiere duda, el que disfrute más sueldo por razón de su empleo. Disfrutando sueldo igual, el más antiguo en el empleo que lo devenga. Los procesados podrán hacer la defensa por medio de señores oficiales, o letrados en ejercicio que nombren, no pudiéndose limitar su facultad de nombrar defensor a solo oficiales del ejército.

Art. 30. Todos los demás que se consideren participantes en cualquier concepto de los expresados delitos de rebelión y sedición, serán juzgados y sentenciados por la jurisdicción común y conforme al procedimiento a que por esta ley ha de ajustarse.

En su consecuencia, si instruidas las diligencias sumarias por mandato de la autoridad militar, apareciesen complicados como reos de los expresados delitos otros más que los comprendidos en los tres precedentes artículos, los fiscales de las causas harán expedir inmediatamente los oportunos testimonios del tanto de culpa, y los remitirán al juez de primera instancia que correspondiera por conducto de la autoridad militar superior, la que con toda seguridad pondrá los presuntos reos a disposición de dicho juez de primera instancia para los efectos de justicia.

Art. 31. La autoridad militar en el estado de guerra podrá adoptar las mismas medidas que la civil, y las demás a que esta ley la autoriza. Cuidará muy especialmente de que los jefes o comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, ya a disposición de la autoridad, ya a la de la civil o judicial, lo verifiquen con toda seguridad al punto de su destino, y cuando no llegasen a él, mandará que se formen las causas oportunas para averiguar y castigar las faltas y delitos que en este delicado servicio se cometan, cualquiera que sea la clase del jefe que lo desempeñe.

Art. 32. Para declarar levantado el estado de guerra, luego que hayan terminado la rebelión o la sedición, se celebrará previamente un consejo por las autoridades militar, civil y judicial de la capital de la provincia que se hallare en dicho estado, y si hubiere sobre ello unanimidad de votos, se llevará a cabo el acuerdo, y se dará inmediatamente cuenta al gobierno.

Si el acuerdo no fuese por unanimidad, sino por mayoría de votos, no se llevará a cabo, interin el gobierno, a quien se dará cuenta con urgencia en ambos casos, no resolviéndolo lo que correspondiera en Consejo de ministros.

Solo al gobierno corresponde levantar el estado de guerra cuando haya hecho la declaración en los casos del art. 15.

Art. 33. Levantado que sea el estado de guerra, serán remitidos a los juzgados competentes, para su prosecución y demás efectos de justicia, todas las causas contra aquellas personas que se hallan sometidas al tribunal excepcional por virtud de esta ley.

Art. 34. Las autoridades civiles y militares no podrán en ningún caso establecer ni imponer otra penalidad que la prescrita anteriormente por las leyes.

TÍTULO III.

CAPÍTULO PRIMERO.

De los bandos que dicten las autoridades y de sus infracciones.

SECCIÓN PRIMERA.

Art. 35. Las autoridades civiles y militares en el período expresado de suspensión de garantías publicarán además los bandos que consideren necesarios para mantener mejor el orden público, estableciendo en ellos las penas que incurran los infractores, y las aplicarán gubernativamente.

Art. 36. En ningún caso podrán señalar mayores penas que las siguientes: multas hasta 125 pesetas, o arresto hasta ocho días, si dictase el bando un alcalde popular.

Cuando sea el gobernador de la provincia quien le dicte, podrá elevar la multa a 250 pesetas, y el arresto hasta quince días, a la vez, o separadamente.

Art. 37. Los corregidos por infracción de bandos con multas que sean insolventes, sufrirán por vía de sustitución el arresto, según lo prevenido en el art. 504 del Código penal.

No podrá el arresto por vía de sustitución exceder de los días por que aquellas autoridades puedan señalarle respectivamente según lo determinado en el artículo anterior.

Art. 38. La autoridad militar podrá corregir también del mismo modo, y en la misma forma que la civil, las infracciones de sus bandos en el período de guerra, sin que puedan la superior del distrito y de provincia señalar pena mayor que la de quince días de arresto y 250 pesetas de multa, las dos a la vez, o una sola, y las demás autoridades militares ocho días de arresto y 125 pesetas en la propia forma.

Caso de ser insolventes los multados, sufrirán el arresto por vía de sustitución, sin que pueda exceder de los ocho o quince días, señalados respectivamente en este artículo, el que por tal concepto se imponga.

SECCIÓN SEGUNDA.

Art. 39. Las autoridades civiles y militares llevarán un libro en el que extenderán las providencias que acuerden, imponiendo gubernativamente la multa y el arresto expresados, haciendo constar en ellas claramente el motivo de su imposición.

La providencia se hará saber al infractor gubernativamente por los dependientes o subordinados de aquellas autoridades, entregándole copia literal de la misma. El penado firmará el recibo de esta copia al pie de la diligencia que ha de extender el encargado de hacerle saber dicha providencia: si no supiere, o no pudiese firmar, lo hará un testigo a su ruego: si no quisiere, lo verificarán dos testigos requeridos verbalmente por el encargado de hacer saber la providencia.

Art. 40. Si a la primera diligencia en busca no fuere hallado el penado en su domicilio, se hará saber a cualquiera de los familiares que moren en la casa, mayor de 21 años, con entrega de la copia literal de la providencia, y guardándose las reglas establecidas en el artículo anterior.

Si ni el penado, ni ninguno de los familiares se encontrasen en la casa a la primera diligencia en busca, se entenderán dichas diligencias con cualquiera de los vecinos más inmediatos o personas, que habiten en sus casas y sean familiares mayores de 21 años.

Art. 41. Las providencias acordadas por las autoridades superiores civiles de la provincia, la militar del distrito y el comandante militar de una provincia son ejecutivas. Contra ellas no cabe recurso de alzada. Los infractores pueden, sin embargo, entablar recurso de revisión ante las mismas autoridades, cuyo fallo en este caso será ejecutorio.

Art. 42. Las providencias de las autoridades inferiores civil y militar que impongan arresto, se llevarán a efecto desde luego.

Sin embargo de su ejecución, dichas autoridades, con copia literal de la providencia, la consultarán con las superiores respectivas en el mismo día, siendo posible, y los arrestados podrán acudir ante estas por escrito y por conducto de las inferiores, exponiendo lo que tengan por conveniente. Las autoridades inferiores dirigirán inmediatamente a su destino estas reclamaciones con su informe, y si se hicieren dentro de las primeras veinticuatro horas de la ejecución de sus providencias, omitirán la consulta, limitándose a cursarlas e informarlas.

Las providencias en que se impongan multas menores de 30 pesetas son ejecutivas también, y se observará respecto a ellas lo determinado en el artículo anterior. Las en que se imponga una multa mayor de 30 pesetas no se llevarán a efecto hasta que, hecha la consulta, o dirigida a la autoridad superior respectiva en su caso, por la que la impuso, la reclamación hecha por el multado en las primeras veinticuatro horas siguientes a la notificación, con su informe conforme, modifique o revoque dicha providencia, cuya superior resolución será ejecutada sin ulterior recurso.

TÍTULO IV.

Del procedimiento de la autoridad judicial ordinaria en las causas por los delitos que se expresan en el art. 2.º de esta ley.

CAPÍTULO PRIMERO.

SECCIÓN PRIMERA.

Art. 43. El procedimiento de las causas que forma la jurisdicción ordinaria por los delitos que se consignaron en el art. 2.º de esta ley, será el que expresan los artículos siguientes.

SECCIÓN SEGUNDA.

Art. 44. El juez de primera instancia del partido o distrito en que hubiere principiado la subversión del orden, es el competente para conocer el asunto.

Donde haya dos o más jueces, si la rebelión o sedición tuviere lugar a un mismo tiempo en dos o más distritos judiciales, los jueces respectivos instruirán inmediatamente las primeras diligencias sumarias, que directamente pasarán al más antiguo de ellos, a quien para este caso se declara competente.

El gobierno y las salas de gobierno de las audiencias pueden, sin embargo, cometer el conocimiento de la causa al juez de primera instancia que consideren conveniente, conforme al art. 38 del reglamento provisional de 26 de Setiembre de 1835.

Art. 45. En las causas de esta clase no podrán promoverse contiendas ni competencias.

Si un juez reclamase el conocimiento de la causa, teniendo ya otro, y hubiese duda sobre cuál de ellos sea el competente, no poniéndose de acuerdo a la primera comunicación que con tal motivo se dirijan, pondrán el hecho, sin dilación, en conocimiento de la audiencia, por medio de exposición razonada, para que la sala de gobierno, oyendo en voz al fiscal, decida en el acto lo que estime procedente. Cuando los jueces pertenecieran a distintos territorios, elevarán directamente dicha exposición al ministerio de Gracia y Justicia para la resolución oportuna. Mientras tanto, cada juez continuará los procedimientos que hubiese iniciado.

Art. 46. En todo esto, los jueces de primera instancia en cuyo distrito tenga ramificación el delito, o ocurran hechos justificables por consecuencia del mismo, instruirán las oportunas diligencias, que pasarán al que sea competente para conocer del delito principal.

Art. 47. Todo juez que principie a instruir diligencias en los casos prevenidos en los anteriores artículos, dará cuenta sin dilación a la audiencia del territorio, por conducto del regente, y al ministerio de Gracia y Justicia.

El propio verificará cuando se inhiba y acuerde remitir sus actuaciones al juez competente, y lo llevará a efecto sin consultar previamente con la audiencia el auto de inhibición.

Art. 48. En el momento en que por cualquier medio o conducto tenga noticia el juez de primera instancia de la perpetración de un delito contra el orden público de los comprendidos en esta ley, o de cualquier hecho preparatorio para los mismos, procederá sin levantar mano a la instrucción del correspondiente sumario, dándole preferencia exclusiva, y valiéndose del escribano que sea más de su confianza.

Art. 49. Para la comprobación del delito y de la delincuencia del presunto reo empleará el juez los medios comunes y ordinarios que establece el derecho.

Art. 50. Para mayor actividad, los jueces evitarán la evacuación de las citas y carcos que no sean de conocida importancia, y todas aquellas diligencias cuyo resultado, aun en el caso más favorable para el reo, no hubieren de alterar ni la naturaleza del delito ni la responsabilidad de su autor.

Art. 51. Toda persona, cualquiera que sea su clase y condición, cuando tenga que declarar como testigo en las causas de que se trata, está obligada a comparecer para este efecto ante el juez que de ella conozca, luego que sea citada de orden del mismo, sin necesidad de permiso previo de su jefe o superior respectivo.

Art. 52. La que resistiere, sin asistirla impedimento usto, podrá ser compelida por cualquier medio legítimo de apremio, incluso el de hacerla conducir por la fuerza pública.

Art. 53. Todos han de dar su testimonio por declaración, bajo juramento en forma, excepto el jefe de la nación y las autoridades superiores; estas podrán verificarlo por medio de certificación, informe o comunicación oficial, sin necesidad de comparecer personalmente ante el juez de la causa: aquel no puede declarar ni informar.

Art. 54. Cuando sean varios los procesados, el juez podrá acordar la formación de las piezas separadas que estime convenientes para simplificar y activar los procedimientos, y que no se dilata el castigo de los que resulten confesos o convictos.

Art. 55. En los delitos expresados en el segundo artículo, se procederá siempre a la prisión preventiva de los que aparezcan culpables, y no podrá acordarse su libertad durante la sustanciación de la causa, bajo fianza ni caución alguna, mientras duren los estados de alarma y guerra.

Art. 56. En cualquier estado de la causa en que aparezca la inocencia de un procesado, se sobreseerá respecto de él, declarando que el procedimiento no le para perjuicio, y poniéndole inmediatamente en libertad sin costas algunas. Este sobreseimiento se consultará con el tribunal superior, al propio tiempo que la sentencia definitiva si hubiese otros procesados.

Art. 57. Desde que principie el sumario se dará conocimiento al promotor fiscal, el cual tiene derecho a enterarse de todo lo que en él se actúe y adelante para promover y auxiliar la acción de la justicia; será oído por escrito, siempre que el juez lo estime, y lo será necesariamente para acordar lo que se ordena en el artículo anterior.

Art. 58. Concluido el sumario, se pasará la causa al promotor fiscal para que formalice su acusación en un término breve, que no podrá exceder de cinco días.

Art. 59. Si en la acusación se pidiere la imposición de algunas de las penas correccionales, se hará lo que previenen las reglas 33, 39 y 40 de la ley provisional para la aplicación del Código penal.

Si siendo varios los procesados se pidiere contra uno la imposición de penas atíctivas y contra otros la de penas correccionales, no fuese conveniente formar pieza separada para los de esta penalidad, se dará a la causa, respecto de todos, la tramitación que se marca en los artículos siguientes.

Art. 60. Fuera del caso expresado en el párrafo primero del artículo anterior, se dará traslado de la acusación al procesado para que haga su defensa, por igual término que el concedido por el promotor fiscal, haciéndole saber al mismo tiempo que en el acto de la notificación nombra procurador y abogado, y si no lo hiciera, se le nombrarán de oficio los que se hallaren en turno.

Art. 61. Cuando sean varios los procesados, si pudiesen hacer unidos su defensa, se les obligará a que lo verifiquen bajo una misma dirección. No pudiendo verificarlo de este modo por incompatibilidad u oposición entre ellos, si hubieren de hacerse más de dos defensas, dispondrá el juez que en vez de entregarse el proceso al defensor de cada parte, se ponga de manifiesto al término de los defensores en el oficio del escribano, por el término que aquel señale, sin que pueda pasar de ocho días, dentro del cual deberán formalizarse todas las defensas. En este caso los autos estarán de manifiesto en el oficio del escribano durante diez u ocho horas en cada día, para que los defensores puedan leerlos por sí mismos y sacar las copias o apuntes que crean conducentes, tomando al escribano las precauciones oportunas para evitar abusos.

Art. 62. Por medio de atropellos en los escritos de acusación y defensa deberá necesariamente cada parte articular toda prueba que le conviniere o renunciar a ella, expresando además si se conforma o no con todas las declaraciones de los testigos del sumario, y con cuáles de ellas está conforme, si no lo estuviere con algunas; si no hicieren lo uno ni lo otro, se entiende que renuncian la prueba y están conformes con las declaraciones del sumario.

Art. 63. Si las partes de consuno renunciasen la prueba y se conformasen con todas las declaraciones del sumario, o nada dijese sobre estos extremos por atropellos en sus escritos de acusación y defensa, habrá el juez por concluida la causa desde luego, y sin otro trámite mandará llevar los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia.

En otro caso, recibirá la causa a prueba con calidad de todos cargos por un término breve, que, aunque se prorogue, no podrá exceder de treinta días, admitiendo de las pruebas propuestas solamente las que estime pertinentes y de notoria influencia en el resultado del proceso.

Art. 64. Dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la notificación del auto recibiendo la causa a prueba, presentará cada parte por duplicado la lista de los testigos de cargo o descargo de que intente valerse para su prueba respectiva, expresando la vecindad, estado, profesión, oficio o modo de vivir de cada uno de ellos. Un ejemplar de estas listas se unirá

serán compelidos á comparecer forzosamente, no mediando razones justas que lo impidan, y también cuando á reclamación de alguna de las partes estimase el juez indispensable para el cargo ó descargo la comparencia personal.

Art. 67. Los demás testigos se examinarán por medio de exhortos diligenciados éstos con la mayor urgencia por los jueces exhortados, bajo su más estrecha responsabilidad; pasado el término de prueba sin haber sido devueltos, el juez exhortado seguirá sin ellos el procedimiento, y dará inmediatamente cuenta de todo al regente.

Art. 68. En el día y hora señalados al efecto, se procederá á la ratificación y examen de los testigos, verificando el de cada uno de ellos con separación. Concluida la declaración de cada testigo, las partes ó sus defensores podrán hacer al mismo, por conducto del juez, las preguntas que este admita como pertinentes, extendiéndose así la pregunta como la contestación. También se escribirán las preguntas que el juez desee como impertinentes, si la parte interesada lo reclamase, á fin de que la superioridad pueda apreciarlas en su día.

Art. 69. La prueba de tachas se hará en su caso acto continuo de la principal y dentro del término que ésta, formulando por escrito previamente la parte interesada las preguntas á cuyo tenor deban ser examinados los testigos que presente para dicha prueba.

Art. 70. Concluido el término de prueba, ó practicada toda la que hubiesen propuesto las partes, aunque aquel no haya espirado, lo acreditará el escribano por diligencia, y sin otro trámite, pasará los autos al estudio del juez para sentencia, haciéndolo saber á las partes.

Art. 71. Dentro de los dos días siguientes, si el juez hallare en la causa defectos sustanciales que subsanen, ó faltaren algunas diligencias precisas para el cabal conocimiento de la verdad, acordará que para mejor proveer se practiquen inmediatamente todas las que fueren indispensables, bajo su responsabilidad en el caso de dar margen con esto á innecesarias dilaciones.

Art. 72. Pasados estos días, el juez señalará día y hora para la vista pública dentro de los tres siguientes. Durante este tiempo estarán los autos de manifiesto en la escribanía para que la parte fiscal ó los defensores se instruyan y tomen las notas convenientes, guardándose lo prevenido para su caso en el art. 61 de esta ley. Las costas que devenguen en este acto los curiales se declaran de oficio.

Art. 73. El juez dictará sentencia; que deberá ser fundada, dentro de los cinco días siguientes al de la conclusión del acto de la vista.

En la propia sentencia mandará también que se remitan los autos en consulta al tribunal superior, con citación y emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él dentro de tres días, si la audiencia reside en la misma población; y dentro de seis en otro caso.

Art. 74. El emplazamiento se hará á los procuradores de los procesos, si estos no fueron hallados á la primera diligencia en busca, y al verificador, los escribanos les prevendrá que nombren procurador y abogado que defiendan á sus representantes en el tribunal superior, bajo apercibimiento de nombrarse de oficio, admitiéndoles dicho nombramiento, si lo hicieren, en el acto de la notificación.

Art. 75. Las causas contra reos ausentes se sustanciarán por los mismos trámites determinados en los anteriores artículos; pero no se ratificarán más testigos del sumario que aquellos con cuyas declaraciones no se hubiesen conformado el promotor ó los procesos presentes.

Art. 76. Los jueces tendrán el término de veinte y cuatro horas para dictar las providencias interlocutorias.

Contra ellas no se admitirá más recurso que el de reposición y apelación subsidiaria, interpuesto dentro de segundo día. La apelación solo se admitirá en un efecto, y para sustanciarla se esperará que se remitan los autos á la audiencia en consulta de la sentencia definitiva. Contra las providencias denegatorias de prueba, no se dá recurso alguno; pero la parte agraviada deberá formular ante el inferior la oportuna protesta para que, reproducida su petición en la segunda instancia, pueda recaer decisión sobre ella.

SECCION TERCERA.

De la segunda instancia.

Art. 77. Recibidos los autos en la audiencia, se pasarán sin dilación al relator para que forme el apuntamiento en el término que la sala le señale, atendiendo al volumen de los autos, pero sin que pueda exceder de ocho días.

Art. 78. Devueltos los autos por el relator, se comunicarán al fiscal y á cada una de las partes para su instrucción, por un breve término, que no podrá exceder de seis días para cada uno.

En el caso de ser más de dos las defensas, se practicará lo prevenido en el art. 61.

Al propio tiempo se hará el nombramiento de procurador y abogado de oficio para los procesos que no lo hubiesen verificado por sí mismos ó por su procurador.

Art. 79. Al devolverse los autos ó al darse por instruida de ellos cada parte, manifestará bajo la firma de su letrado y procurador, su conformidad con el apuntamiento, ó las omisiones ó inexactitudes que á su juicio puedan haberse cometido en él, pidiendo en este caso se rectifique.

Art. 80. También podrán las partes, al devolver los autos ó darse por instruidos, pedir que se reciba la causa á prueba.

Este recibimiento á prueba en la segunda instancia solo podrá tener lugar para justificar hechos nuevos de notoria influencia en el resultado de la causa, protestando no haber tenido conocimiento de ellos en tiempo oportuno para alegarlos y probarlos en la primera, y sobre los hechos no admitidos por el juez en primera instancia cuando se hubiere hecho la protesta expresada en el art. 76.

Art. 81. La sala designará un ministro ponente, el cual informará sobre la reforma ó adiciones del apuntamiento, y sobre la procedencia de la prueba que se hubiere solicitado.

El ministro ponente ejercerá las demás funciones propias de este cargo.

Art. 82. Si la sala estimase procedente la propuesta, mandará practicarla, recibiendo para ello la causa á prueba por un breve término, que, aunque se prorogue no podrá exceder de veinte días.

La prueba en este caso se practicará con las mismas formalidades que en la primera instancia ante el ministro ponente, ó dándose comisión al juez inferior del punto donde se hallen los testigos.

Art. 83. Conformes las partes en el apuntamiento, ó hechas en él las reformas acordadas, ó adicionado en su caso con las pruebas practicadas en la segunda instancia, se señalará para la vista el día más próximo posible, con citación de las partes.

En el acto de la vista informará de palabra, primero el fiscal y después los defensores de los procesados, por el mismo orden que hubieren guardado en la primera instancia. Caso de haber apelado alguna de las partes, su defensor únicamente usará de la palabra antes que el fiscal.

Art. 84. Estas causas se verán precisamente por cinco magistrados, debiendo ser uno de ellos el regente ó el que haga sus veces.

Si en la sala á que corresponda no hubiere número suficiente de ministros, se agregarán los más antiguos de las otras hasta completarlo, con exclusión de los presidentes, si hubiere número suficiente para ello.

Art. 85. Concluida la vista, la sala dictará sentencia fundada dentro del término de seis días.

Esta sentencia causará ejecutoria.

Art. 86. Dictada la sentencia, se remitirá sin dilación, con certificación de ella, al juez inferior para su ejecución y cumplimiento, sin perjuicio de la tasación de costas y gastos del juicio.

Hecha esta, y aprobada, se devolverá la causa al juez inferior con la certificación correspondiente.

Art. 87. Contra las providencias interlocutorias de las audiencias en las causas de que se trata, no se admitirá más recurso que el de súplica para ante la misma sala, si se interpusiere dentro del segundo día.

Art. 88. Los jueces y tribunales no tendrán para estas causas horas determinadas de despacho, y utilizarán el día y la noche por todo el tiempo que sea necesario según la urgencia del caso, á juicio de los mismos.

Art. 89. Sobre los demás puntos respectivos al procedimiento en estas causas ante la autoridad judicial, que no se hallen expresamente marcadas en la presente ley, se observarán las reglas establecidas en los procedimientos comunes y en la ley provisional para aplicación del Código penal, sin que se acuda á ninguna otra ley especial.

Art. 90. Quedan derogadas las leyes, decretos, órdenes y otras disposiciones publicadas hasta el día sobre el procedimiento en las causas que se formen por la jurisdicción ordinaria y por los delitos á que se refiere esta ley.

ARTICULOS ADICIONALES.

Artículo 1.º Las disposiciones precedentes sobre el procedimiento regirán hasta que se plantee el juicio por jurados, como prescribe el art. 93 de la Constitución, en cuyo caso se modificarán las de esta ley, según lo requiera la ley orgánica de tribunales.

Art. 2.º La ley presente no abaza los casos de guerra extranjera ni de guerra civil formalmente declarada. Palacio de las Cortes 24 de Febrero de 1870.—Eulogio Braso, presidente.—Francisco Javier Moya.—Luis de Molini.—José Vicente Rivero.—Jacinto Anglada.—Carlos Navarro y Rodrigo.—Daniel Carballa.

CRÓNICA PARLAMENTARIA.

El Sr. Figuerola debe estar de enhorabuena: no tomará, por ahora, asiento en el Congreso su paisano el Sr. Puig y Llagostera. El vulgar proverbio de que «nadie sabe lo que traerá el día de mañana», ha tenido confirmación una vez más, pues, gracias á un inesperado incidente, el de la desaparición de un documento referente á las actas de Vich, la discusión de estas, que estaba en la órden del día, hubo de suspenderse ayer tarde, pasándose á otro asunto. Al decir que la verdad del proverbio se ha confirmado una vez más, no nos referimos á todo el mundo, porque podría suceder que nos equivocáramos y hubiera algnien para quien el tal incidente no fuera tan inesperado como para nosotros, simples espectadores de lo que ocurre de puertas á fuera. Ese incidente puede haber sido un *Deus ex machina* hábilmente preparado de antemano con objeto de aplazar la discusión de unas actas que no hacen gracia ninguna al señor ministro de Hacienda. Nosotros, sin embargo, nada afirmamos ni podemos afirmar, y la observación que dejamos hecha se nos ha ocurrido tan inocentemente como habrá pasado la cosa, según toda probabilidad. Ello es que el diputado electo Sr. Puig y Llagostera, tiene contra sí un auto de prisión por causa que se le sigue á consecuencia de la carta que dirigió al Sr. Figuerola, y se halla en libertad bajo fianza. El Sr. Suarez Inclán, presidente de la comisión de actas, pidió que para esclarecer el debate, se leyera la certificación en que constan esos extremos, pero el documento no pareció, y por consiguiente, no pudo leerse. Hay que buscar, pues, el documento en cuestión, y hasta que parezca no puede continuarse la discusión del acta de Vich, referente al Sr. Puig y Llagostera. ¿Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo?

Lo cierto es que, según noticias que hemos adquirido posteriormente, tanto el Sr. Suarez Inclán, como otros dos individuos de la comisión de actas, los Sres. Calderón y Herce y García Gómez han hecho dimisión de sus cargos. Pareceremos que un accidente tan sencillo no justifica determinación tan grave, porque los efectos guardan ordinariamente relación con sus causas, correspondiendo á aquellos á la importancia de estas.

Logrado el objeto... decimos mal, siendo imposible continuar la discusión del acta de Vich por el inesperado incidente de que hemos hecho mérito, y suspendida también la que empezó sobre la elección del Sr. Pascual y Genis en la otra vacante de la misma circunscripción, se reanuda el interrumpido debate del proyecto de ley de reemplazo del ejército.

Aunque nuestros lectores no pudieran enterarse por el *Extrator* de la sesión, fácil nos sería poder reducir á muy breves líneas la sustancia de los discursos que en contra pronunciaron los Sres. Gil Berges, Rodríguez Seoane y Cervera; pero sabidos son todos los argumentos que se han empleado y emplean contra el sistema de reemplazo del ejército adoptado en el proyecto, que es con ligerísimas modificaciones, el mismo que encontró vigente la actual situación, bien que, á la verdad, algo empeorado por esas mismas modificaciones. Odiosidad de la contribución de sangre, llanto de las madres, desconsuelo de los hijos, etc., etc. He aquí el fondo de la argumentación de los contrarios á las quintas, y verdaderamente razones muy poderosas serían para variar de sistema, si fuera posible en nuestro país, otro cualquiera que no nos pusiera en la alternativa de imponernos una carga que no podríamos sostener, ó de no tener ejército. Así es que no calificaremos de *buclicas*, como con poca propiedad, por cierto, las denominó el marqués de Sardoal, á las razones expuestas por los diputados que combatieron el proyecto.

El joven marqués tiene fácil palabra, y si bien en lo general estuvo acertado, en la defensa del proyecto, no pudo, sin embargo, librarse del achaque, común en los hombres de la revolución, de mezclar en su discurso algunos efectos de brocha gorda alusivos á la dinastía caída y á la situación anterior á la actual. Según el aristocrático demócrata, son buenos los ejércitos permanentes porque sin la escuadra de Cádiz y sin el ejército de Alcolea, la dinastía de la reina no hubiera caído, y el gobierno de González Brabo continuara ocupando el banco azul. ¡Gran argumento! Si esa misma escuadra y ese mismo ejército se alzaran un día en armas contra el actual gobierno, ¿triunfasen, se podría contestar á los valientes de las propias palabras de S. S., lo siguiente: Los ejércitos permanentes son buenos, porque sin ellos todavía pesaría sobre el país los factores de la calamitosa revolución de Setiembre, y se sentarían en el

banco de los ministros los que se rebelaron contra su soberanía. Después de todo, el marqués de Sardoal, al hacer esta apología del derecho de rebelión y al lanzar esta piedra á su paso ante la majestad caída, se quedó sin recoger la cosecha de aplausos que quizás esperaba.

En la sesión de la noche fueron aprobados los presupuestos de Hacienda y el de Ultramar, sin discusión este último. El art. 38 del primero, que trata del personal de carabineros, fué impugnado por el Sr. Rebullida; pero el ministro de Hacienda le manifestó que no podía acceder á la reducción del personal de aquel cuerpo, necesario para resistir las tendencias de la restauración borbónica. ¿Qué confianza inspira el ejército al ministro de Hacienda, cuando funda tanta esperanza en los carabineros?

Votado el presupuesto de Hacienda, es posible que á la mayor brevedad continúe la discusión del acta del Sr. Puig.

LA CUESTION DE INTERINIDAD.

La gravísima y capital cuestión de candidatura al trono está, há mucho tiempo, siendo una pesadilla, un verdadero suplicio (el suplicio de Tántalo), para los partidarios de la *coalición setembrina*.

Para los unos, porque, después de pasear de corte en corte y de una manera indigna por lo humillante, el glorioso cetro de la activa y noble nación española, solo han conseguido, en justo premio de sus torpes y antipatrióticas gestiones, ver repudiado y escarnecido el poderoso emblema de nuestro secular é indomable país.

Para los otros, porque en vano aspiran, aún por reprobados manejos, á entronizar en la patria de Pelayo, de San Fernando y de Isabel la Católica, un extranjero, contra el cual se sublevará un tiempo, en los hidalgos españoles, su acrisolado espíritu patrio, su profunda aversión á la más insidiosa de las ingratitudes, y su arraigada é inquebrantable adhesión hacia la dinastía legítima, a quien, si la ambición, la soberbia y la deslealtad de media docena alejó del solio de sus mayores, no por eso dejó de reinar ni dejará jamás de reinar en el corazón de la inmensa mayoría de los buenos españoles.

Para los restantes, en fin, porque sueñan con el imposible de establecer la forma republicana en una nación, como la nuestra, esencial y necesariamente monárquica.

Y, ¿por qué en vano se agitan los partidos coaligados, tras su dorado sueño, y ninguno logra el objeto de sus aspiraciones? ¿No han apurado para ello todos sus recursos, unos por la vía diplomática, otros por medio de su influencia en el Parlamento, y aun dentro del mismo gobierno, y los demás por la propaganda primero, y por la fuerza material después, levantándose en armas para derribar su propia obra?

¿Por qué los principios extranjeros os devuelven desdenosamente la gloriosísima corona de España? ¿De tal manera osifican vuestros locos propósitos, vuestra sed de mando, vuestra ambición y vuestra ausencia de españolismo, que no veis claramente los naturales móviles de tan afrentoso desden?

Pues es muy sencillo: no aceptan nuestro presente, porque en Europa, como en España, tienen la conciencia de que ofrecéis lo que no podeis ofrecer; que la corona con que les brindais no os pertenece; la consideran más bien como un objeto precioso, una alhaja que la casualidad puso en vuestras manos, pero que tiene su legítimo dueño, á quien conocen, y á quien, más tarde ó más temprano, tendrían forzosamente que devolverla.

Y ¡ay del incauto ambicioso que, deslumbrado por los torpes y seductores halagos de un puñado de ingratos, y dejándose llevar de su excesiva ambición, osare profanar el trono de Castilla!... ¡Cuán caro, y cuán amargo podría costarle su atrevimiento!

No creemos, y ahora menos que nunca, que ni nuestros falsos regeneradores piensen en exponerse á sufrir nuevos bochornos, buscando imposibles candidatos, ni que haya ninguno tan ofuscado ó tan temerario, que se obstine en imponerse á los españoles; porque quien quiera que fuera, nunca, nunca sería rey legítimo de España, y su reinado, si lo alcanzaba, habría de ser, indefectiblemente, tan fugaz y pasajero como feo en los más grandes desastres.

Por eso repetimos que los *hombres de Setiembre* no esperamos que lleven su falta de patriotismo ó su mal disimulado encono á tal extremo. Demasiado conocen el espíritu del país y el carácter del pueblo español, tan amante de su legítimos reyes como enemigo irreconciliable y constante de los intrusos monarcas.

Demasiado saben los *héroes de Cádiz* que la revolución fué mucho más allá de donde ellos deseaban; demasiado comprenden que á los españoles, con rarísimas excepciones, les costó mucho tiempo reponerse del estupor que les causó el atentado contra el trono; demasiado ven ellos que no hay otra solución posible, ni más conveniente, ni más necesaria para conjurar la anarquía en que vivimos, que la restauración de la dinastía legítima.

¿Es posible que desconozcan nuestros regeneradores que su repentina é injustificada subida al poder y su impotencia en el ejercicio de él, son la causa eficiente y natural del cúmulo de males que nos adige y aniquila en el interior, y del desprestigio de que, para colmo de desdichas, somos objeto en el exterior?

Esta intranquilidad, esta desconfianza, este desconcierto impregnado en todas las esferas de la administración y en todas las clases de la sociedad, ¿qué otra cosa puede traer en pos de sí que la miseria, el hambre y el aniquilamiento de todas las fuerzas vivas de la nación? ¿No veis por do quiera el vaicilento esqueleto del *pauperismo*? ¿No veis acercarse precipitadamente, y con sonisa sinistralidad, la todavía más terrible y repugnante figura del *socialismo*?

Vosotros, que os llamais regeneradores, y

que á vuestro paso por la noble España todo lo habeis relajado y destruido, así en el orden civil como en el militar y en el religioso, sin crear nada que satisfaga al sentimiento público; vosotros que estais predestinados á vivir en continua lucha con el orden y con el bienestar del país; vosotros que á los ojos de la nación y de la Europa entera habeis hecho una revolución tan injustificada como desastrosa sin más objeto que el de satisfacer vuestra insaciable sed de mando, sacrificando á vuestras pasiones, con una deslealtad sin ejemplo, todo lo noble, todo lo hidalgo, todo lo tradicional que encierra este altivo país, no encontrareis quien digna y legítimamente pueda ocupar ese trono; al que se vuelven sin cesar las miradas de los buenos y leales españoles, considerándolo como el remedio al más eficaz, contra la llaga revolucionaria que va gangrenando el cuerpo social: ¿á qué aguardais? ¿Qué pretendéis con demorar un mes y otro mes la importantísima cuestión de candidatura al trono? ¿Esperais formalmente hallar vuestro soñado candidato revolucionario? Y aún cuando lo halláreis, ¿abrigais la candida esperanza de que la nación lo aceptaría? ¡Insensatos!... ¿Juzgais por vuestra conducta la lealtad y la independencia de la patria?

Pero no: las moratorias y aplazamientos en una cuestión tan elevada y trascendental, son la prueba más concluyente de que los *héroes de Setiembre* no piensan ya en poner la *regia cúpula* á su *grandiosa obra*, desengañados, seguramente, de no encontrar, aun recorriendo las cortes más subalternas de Europa, su *ídolo setembrino*. Hacen bien, porque no habrá un príncipe, por insignificante que sea, que no comprenda que nunca tendría en España más adeptos que unos cuantos, que lo mismo contribuirían á su encumbramiento, que á derribarlo estrepitosamente mañana.

Pues si estais como debeis, convencidos hasta la evidencia de que vuestros esfuerzos no bastan á conseguir el término imposible de vuestra monstruosa obra; si la desatentada é injustificable revolución de Setiembre no es susceptible de otro coronamiento que su propio descrédito y del anatema universal fulminado contra ella por propios y extraños; si vuestra permanencia al frente de los destinos de este infortunado país, no ha de servir, á ciencia cierta, más que para aumentar el largo y lúgubre catálogo de sus desastres y desventuras, ¿por qué esa obstinación con que pretendéis hacer creer á todos que la *interinidad conviene*, que la *interinidad es necesaria*? ¿No vé todo lo contrario ese mismo país á quien quereis alucinar con tan vanas y quiméricas promesas? Esas promesas, ¿qué otra cosa son sino nuevo ardor para alargar un poco más vuestra funesta dominación? ¿No vé que, por vosotros, los capitales se ocultan, el trabajo desaparece y la miseria crece? ¡Ah! ¡Bien lo vé, y demasiado toca sus terribles consecuencias!

No se le oculta tampoco que vuestra soberbia marcha al nivel de vuestros desaciertos, y lógicamente deduce que una situación tan anómala y funesta como la actual, es insostenible, y que su muerte es tan próxima, como público su descrédito.

ORGANIZACION PROVINCIAL.

No quisiéramos aparecer exagerados, ni aun molestos, en la exposición de nuestro criterio respecto á la inconveniencia de someter á las diputaciones facultades gubernativas y de autoridad sobre los ayuntamientos. Apasionados quizás por el buen orden y regularidad en la administración, vemos de grandísimo bulto los conflictos que han de surgir por la revisión de los actos de los ayuntamientos, las de sus acuerdos que podía hacer la comisión provincial constantemente, traten de lo que traten. Con esto no exageramos, se deduce terminantemente del párrafo 2.º del art. 65 del proyecto, que dice que es competencia de la comisión la revisión de los acuerdos de los ayuntamientos. No debe perderse de vista que la comisión es permanente.

Ha ocurrido hasta hoy á ningún gobierno, á ningún poder legislativo en los tiempos de más severa centralización, darse ni dar semejante facultad?

Conocemos perfectamente lo que es la naturaleza humana, y sin querer ofender la intención ni rebajar el patriotismo, la abnegación y todas las buenas cualidades que pueda tener un diputado, la circunstancia de ser hombre, le ha de sujetar á afecciones particulares, ya originadas de sus intereses privados, ya de cariño ó resentimientos, ya movido por la vanidad que, desgraciadamente á todos nos domina, y tanto contraría la rectitud y los mejores deseos.

Si se pretende que la provincia esté al capricho y onimoda voluntad de la diputación, la ley encierra una hipocresía, ocultando el verdadero pensamiento de su tendencia, y objeto y el pensamiento de descentralización se destruye al ser concebido á impulsos de la equivocada idea que se tiene de la palabra y de la confusión que de ella se hace con la de independencia.

Algunos que han hecho estudios sobre la organización del gobierno y administración, sin tener en llamado poder al municipio; pero á la provincia, ninguno ha tenido valor para darle esta denominación. ¿Cómo valor, si hubiese sido temeridad! Los Estados ó las naciones, como quiera llamarse á la agrupación bajo un mismo régimen político, se componen de pueblos y solamente de pueblos; y si para el mejor orden y para la mejor administración de ellos se ha creado la provincia, no ha sido con otro objeto ni con otro fin que, con el de facilitar el modo de mejor gobernarlos y mejor administrarlos. Admitimos así la provincia, y admitimos para la mejor gestión de lo que sea común á los pueblos, una junta de delegados de los mismos, un centro de gestión y acción de esos intereses con facultades amplias, con verdadera libertad, pero no admitimos que esos delegados, que ese centro de gestión sea la opresión de sus representados, sea la censura eterna de sus actos, la omnipotencia en lo que es de ellos, y solo de ellos, y que sea, en una palabra, el poder que ha de hacer cumplir la ley común.

Repetimos que las afecciones, ya motivadas, ya creadas por intereses privados, son malos conatos para ejercer las altas funciones de juez, todos los comprendidos en este juicio, y hacemos sados y llenos de patriotismo y abnegación, que tereses públicos. Para no errar, para evitar juitabilidad que debe rodear á los diputados de los pueblos en lo que llamamos provincia, es indispensable apartarse de la verdadera misión que se les confiere, y dejar á los pueblos la libre acción de las suyas, ya que por ello contraen responsabilidad inmediata ante sus administrados.

Prescindamos, pues, de las atribuciones administrativas que concede la ley á las diputaciones, porque admitimos estos cuerpos como gestores putación permanente, esto es, de la comisión omnímoda facultada para lo que no puede ni debe ser su competencia. Es un contrasentido la duplicidad de autoridades en un mismo punto, y si este contrasentido no gravase los fondos públicos, aun con ser una aberración, no sería tan lastimoso como es; pero es un contrasentido en buenos principios y un gravísimo daño material para los intereses de la provincia, siendo un entorpecimiento á la marcha expedita en que debe darse á la verdadera autoridad, al gobernador, que es el gobierno en lo político, en lo económico y en lo administrativo, comprendidos bajo esta denominación todos los ramos de la administración.

Es un contrasentido, porque el gobierno debe ser el único amparo del que se sienta agraviado por los acuerdos de los ayuntamientos, y la coexistencia de dos autoridades ha de producir, no solo rencores, sino conflictos, y es un gravamen, porque las retribuciones de la comisión, digase diputación permanente, ha de mermar el capital provincial. Un cargo de elección retribuido es una anomalía, y más un cargo que por lo común ejercen las personas de mejor posición de la provincia, y quizás todas residentes en la misma capital.

Si es una indemnización por el abandono en que han de dejar dos veces en la semana sus negocios particulares, ¿por qué no se indemniza al alcalde, que en muchos pueblos será un mero jornalero, y á quien distrae de la ocupación con que sufragará la manutención de sus hijos el ejercicio de su cargo, y quien por razón de este debe obedecer á los mandatos de la autoridad judicial, á los de la gubernativa, y á quien llaman á funciones continuas la vigilancia del pueblo, y contra quien pesa siempre una responsabilidad personal y moral directa? ¿Son iguales las atenciones de un diputado provincial á las de los alcaldes? ¿Debe suponerse aquel más acreedor á remuneración que este? ¿Tiene el diputado las atenciones y la responsabilidad que un alcalde? Sería menos repugnante una indemnización en este, pero lo sería y sería siempre que, cargos declarados gratuitos y honoríficos por la ley, sean remunerados de otra manera que con el aprecio de los que los confieren.

No es necesaria la comisión, como no lo es que las diputaciones sean lo que van á ser por la nueva ley, ni es conveniente someter al municipio á otra corporación de su índole cuya respetabilidad solo se funda en la extensión del territorio que administra, en la calidad de las personas que la constituyen; pero no en la importancia de su misión administrativa.

Hombres de gobierno y de principios, de verdadera administración, decláramos que esta ley, en la parte que dá á las diputaciones carácter y facultades de autoridad, es insostenible, si España ha de ser un reino y no una federación de diversos Estados.

Nuestra voz no tiene eco en el santuario de las leyes; pero téngalo en la conciencia de los que allí pueden levantar la suya, é inclínense, aun en el caso de autorizar el planteamiento de la ley sin discutirla, á que se suspenda la observancia de los artículos que hacen á la diputación autoridad y los que la hacen el censor de los ayuntamientos.

Aunque *La Epoca* maneja admirablemente todas las aguijas, incluso la de *marcar*, no nos han de hacer mella sus intencionadas picaduras.

Nosotros frecuentamos los círculos políticos, y en ninguna parte hemos oído que haya llamado la atención la manera con que hemos hablado del ilustre caballero é inteligente general marqués de Novaliches; porque bien claramente decíamos y consagrábamos la *razon política* que en nuestro juicio reclamaba en el ejército de Andalucía, antes y después del suceso de Alcolea, la presencia del ministro de la Guerra ó de su señor hermano; pero como al buen pagador no le duelen prendas, y como nosotros, ni tenemos falso amor propio, ni nos gustan las retenciones, ni quizá expresemos tan bien como deseamos todos nuestros conceptos, nos apresuramos á declarar inmediata y categóricamente, que consideramos al distinguido general marqués de Novaliches como una de las glorias más puras del ejército español; que le tenemos como un general de rara pericia é ilustración; que puede mandar y ha mandado siempre nuestro valiente ejército con acierto, con gloria y con honra, y que dudamos que á nadie le haya pasado por la imaginación seríamente que nosotros hayamos tenido intención directa ni indirecta de atacar una reputación tan solidamente afianzada entre propios y extraños.

Nuestro deber y nuestra conciencia nos obligan á deshacer todo concepto equivocado en esta parte.

No decimos en el caso actual en que se trata de un amigo nuestro muy querido, sino aun tratándose de nuestro mayor adversario, tendremos el valor que en el caso presente es innecesario é inútil, de deshacer errores de hecho ó de concepto, para demostrar la buena fe con que procedemos.

Nos atrevemos á rogar á nuestro colega que haga pública esta aclaración nuestra, para tranquilizar el ánimo de los que otra cosa hayan sospechado leyendo su artículo, aunque volvemos á repetir que á nuestros oídos no ha llegado semejante rumor, que no tiene el menor asomo de fundamento.

Tan escandaloso y sin precedentes nos pareció el hecho de que el Sr. de Blas, al mes de ocupar la

subsecretaría de Estado, hubiese sido agraciado con la gran cruz de Carlos III, que a pesar de haber recibido la noticia por persona bien enterada, no nos atrevimos a darle sino en sentido dubitativo. El hecho es, sin embargo, cierto, pues según nos dice hoy *La Iberia*, el Sr. de Blas piensa renunciar la condecoración a que por tantos títulos era acreedor, por no sujetarse por segunda vez a elección. Preciso es convenir que ejemplos de tan audaz favoritismo, no se han visto hasta que han venido a regenerarnos los héroes de la España con honra.

Hemos oído asegurar que el gobierno, para premiar los dilatados servicios y extraordinarios méritos del Sr. Coronel Ortiz, y le ha condecorado con uno de los collares vacantes en la insigne orden del Toison de Oro; pero los amigos del agraciado, si bien reconocen en él méritos bastantes para tan señalada distinción, insisten en que la renunciará para no tener que acudir de nuevo a las urnas. No respondemos de la exactitud de la noticia, que corria hoy muy válida en los círculos políticos, pero la verdad es que cuando el novel subsecretario de Estado, al mes de entrar en funciones, se concediera con la gran cruz de Carlos III, nada tendría de extraño que se confiriese el Toison al Sr. Coronel Ortiz.

El País se hace eco de los clamores de ciertos periódicos, que conmemoran estos días los fusilamientos que dieron por resultado la rendición de las plazas de Alicante y Cartagena, sublevadas el año 44; pero lo que tal vez no sabrán, ó habrán olvidado los citados diarios, es que el general que allí mandaba era nada menos que el actual director de infantería D. Fernando Fernandez de Córdova, marqués de Mendigorría, gobernador militar de Madrid cuando la sublevación llamada de las Tiendas el año 45, general en jefe de la división que fué a los Estados Pontificios el 49 para defender el poder temporal del Papa (de que allí se mostraba acérrimo paladín), y hoy uno de los más extremados patriotas de la situación. Con que, otra vez ser más oportuno en las citas.

Según dicen de Cartagena, parece que se ha recibido orden en aquel departamento para que la escuadra suspenda su viaje a las costas de Galicia y esté preparada para desempeñar la comisión que se le ordene.

De público se dice, que esa orden puede estar relacionada con el golpe de Estado que se teme se fragüe en favor de Montpensier.

Según dice *El País*, órgano del Sr. Topete, en el párrafo que trasladamos a continuación, en Manila sucede con el correo lo propio que en Madrid; allí se viola el secreto de la correspondencia y aquí ya hemos manifestado en más de una ocasión que nuestro periódico se recibe con suma irregularidad en provincias. O no se recibe, y que las cartas de París llegan a manos de los interesados en esta corte con un día de retraso, y a veces con señales evidentes de fractura.

He aquí el párrafo de *El País*: «Tenemos noticias fundadas de los ilegales abusos que en la administración de correos de Filipinas se cometen con la correspondencia procedente de la Península, bajo pretexto de descubrir el origen de ciertos artículos relativos a aquellas islas. Siendo declarada por la Constitución vigente inviolable la correspondencia, y un delito grave el hecho de que nos lamentamos, justo es que se dicten las oportunas órdenes para averiguación de cuanto haya en este asunto, a fin de que se hagan cumplir las leyes establecidas, así dentro de España como en sus provincias de Ultramar, y que se exija la debida responsabilidad a quien las haya quebrantado.

El secreto de la correspondencia pública es uno de los rasgos más característicos de todo pueblo civilizado; y cuanto rigor se desplegue para asegurar su inviolabilidad dentro de las leyes, es justo y provechoso. Estaremos a la mira de cuanto en este particular ocurra, pues somos tan amantes de la libertad como de la claridad de los hechos.

«Sr. Director de El Eco de España.

Muy señor mío y de mi mayor consideración: Como militar, no de los de nuevo cuño, sino del antiguo régimen: es decir, de los que tenían la manía de creer que el honor y la lealtad eran la base de su honrosa carrera, he leído con atención la polémica que ha suscitado la Memoria del capitán general marqués de la Habana, referente al último pronunciamiento militar, y como a V. no lo supongo versado en las ordenanzas generales del ejército, y en dicha Memoria veo que ha olvidado el susodicho general, me como la libertad de trasladar íntegros los artículos 56 y 57, título 17, tratado 2.º, que dicen literalmente así:

«Art. 56. El general a quien yo fuese el mando de mi ejército no podrá disciplinar su conducta con el parecer de sus generales, y lo mismo se entenderá con todo oficial que mandase cuerpo ó destacamento. Los consejos de guerra sobre las operaciones militares exponen el secreto y desunen los ánimos con la variedad de dictámenes; ordinariamente embrazan al general con sus resoluciones si tiene intenciones de obrar; y si él se inclina a la inacción, lo suele disponer de modo que se cubra con ellos su indecisión.

«Art. 57. Todo mando militar ha de residir en uno solo, y este responder de sus operaciones. Ningún jefe militar dirá a subalterno suyo que proceda de acuerdo con otro, elegirá siempre el mejor, le encargará el todo, y le dejará la libertad de tomar el dictamen que quisiere por la responsabilidad que le queda de los suyos.

La estricta y rigurosa observancia de estos dos artículos se encarga por orden de la regencia del reino de 13 de Abril de 1811.

Después de leído esto, en cuyas doctrinas están acordes los más eminentes autores militares, no creo haya quien dude que la conducta del marqués de la Habana fué por todo extremo vituperable, no solo convocando el consejo de generales de que habla, sino separándose de su opinión.

No me compete entrar en otro orden de consideraciones. Mi objeto es patentizar la ignorancia ó olvido de aquellos sabios y previsores preceptos de las ordenanzas militares, y que si se hubieran observado, el pequeño revés que sufrió la vanguardia de nuestro leal y sufrido ejército, no habría sido bastante causa para proceder como se procedió, ni menos para dejar de defender a nuestra reina, al trono y a nuestra antiquísima y gloriosa monarquía.

Diráse tal vez que el marqués de la Habana

no era el general jefe; pero esto no deja de ser un sofisma para los militares verdaderos, que saben lo que es un ministro de la Guerra respecto de los demás generales, y que en las circunstancias y situaciones como la de que se trata, el ministro de la Guerra, no estaba virtualmente, ó no debía estar en el palacio de Buenavista, sino a caballo sobre el Guadalquivir en el Puente de Alcolea.

Madrid 11 de Marzo de 1870.—UN VETERANO.

La Correspondencia anunció ayer, que anteañoche se habían dado las órdenes oportunas para que fuesen puestos en libertad los presos políticos de la Carraca.

En cambio, dice con la mayor suavidad, y en párrafos separados, para que no llame tanto la atención, que el gobierno ha destinado a las islas Baleares a varios jefes que se hallaban de reemplazo en Barcelona. Nos alegramos de que se haya puesto en libertad a los presos de la Carraca, pues ya era tiempo; pero sentimos que en vez de poner en libertad a muy beneméritos generales y jefes deportados a Canarias con algunos meses de anticipación a los sucesos que motivaron la prisión de los ahora excarcelados, se haya enviado otros a aquellas islas y algunos más a las Baleares.

La Correspondencia dice sencillamente que a los deportados «se los ha trasladado en la misma situación de reemplazo» a Ibiza, y que el gobierno ha aprobado la medida. Ya lo sabíamos, como sabemos que ningún diario de la situación ha tenido una sola palabra de censura para una tan manifiesta violación de los derechos individuales, como es la deportación de los militares retirados.

Es mucha la imparcialidad de nuestros colegas.

Aseguran varios periódicos que se trata de trasladar a Valladolid el archivo de Simancas. Cada traslado de esta clase viene a ser una verdadera calamidad: por grande que sea el esmero y cuidado con que se efectúe, siempre se pierden ó estropean importantísimos documentos, de un mérito inapreciable para la historia. Si el edificio en que ahora está el célebre archivo amenaza próxima ruina, hágase en buen hora la traslación anunciada; mas en otro caso, no se exponga a la ciencia y al mismo Estado a pérdidas tan sensibles como irremediables.

¿Cuéntase en varios círculos que pasan por bien enterados que estrechado y hasta reconvenido ágramente, cierto ministro por un teniente de cimbrios, á causa de haber consentido que no se demoliera el templo de las Calatravas, contestó S. E. dejando ver la posibilidad de que la demolición del convento se hiciera de tal modo que no permitiera el que quedase en pie la iglesia.

Sería una casualidad sensible, por no decir un noble ardor, digno de quien lo concibiera.

Añoche a las ocho se verificó la traslación de las monjas existentes en el convento de las Calatravas, víctima de la piqueta revolucionaria, al que ocupa la comunidad de la orden de Santiago. Los caballeros de Calatrava, deseando que las piadosas y desconsoladas señoras, á quienes se arranca del asilo donde desahaban concluir sus días, sufran en la traslación lo menos posible, acordaron que esta fuera por la noche, en los coches de ellos mismos y acompañadas de sus esposas, despidiéndolas en la calle de Alcalá una comisión de caballeros de la orden, y recibiendo otra en el nuevo edificio á que se les ha destinado.

Se nos asegura que el Sr. Figuerola ha ultimado ya con la compañía Banco de París un nuevo empréstito de doscientos á doscientos cincuenta millones, dando en garantía setecientos cincuenta millones de bonos que tenía en cartera.

Esta noticia circuló anoche á última hora, y produjo un verdadero pánico entre los hombres de negocios.

Mucho debe ser el crédito de la situación cuando el Banco de París recibe en garantía cuatrocientos cincuenta y siete millones, valor efectivo de los bonos, por los doscientos del empréstito.

Como el gobierno no acostumbra pagar con puntualidad, los prestamistas venderán la garantía á cualquier precio, con lo cual los tenebrosos de bonos quedarán al nivel de los imponentes de la Caja de depósitos.

Esto, aparte de que el Banco de París no necesita adelantar un céntimo al gobierno, pues con tan enorme garantía, cualquiera puede levantar los fondos necesarios para sacar de apuros por algunas semanas al Sr. Figuerola.

Después de atronarnos los oídos los órganos de Montpensier con que el leal y agraciado duque se proponía edificar un gran barrio de obreros, ahora salimos con que la verdad del caso es que el apocreado Orleans hace al ayuntamiento la proposición de que construirá el barrio si se le regalan los terrenos, que valen unos cuantos millones de reales.

Ya decíamos nosotros que la cosa no podía ser menos.

La cuestión del Tornado parece que vuelve otra vez á estar sobre el tapete, si es cierto lo que dice un telegrama de Londres, en el que se dá la noticia de que España ha aceptado la proposición de Inglaterra de someter este asunto al arbitraje del emperador Napoleón.

En los momentos en que España entera se encuentra sumida en una anarquía que nada tiene de mansa, se dejan los caminos y los pueblos abandonados, y se reconcentran en Madrid 800 guardias civiles.

Para qué querrá el conde de Reus esos 800 miserables, como llamó el Sr. Ríos Rosas á los individuos de este dignísimo cuerpo?

En caso de peligro, ¿no habría bastante con que el general Prim saliese á la calle con aquella escopeta de que nos habló en el Senado?

Se habla con insistencia de un lance de honor entre el duque de Montpensier y el infante D. Enrique, con motivo de una hoja volante que se atribuye á este último, y que el primero supone ofensivo á su decoro y dignidad. Se dice que es-

tán encargados de representar al duque de Montpensier de generales de la situación, y al infante D. Enrique dos diputados republicanos, cuyos nombres no recordamos en este momento.

Sentimos que la pragmática de Carlos III sobre desafíos no esté vigente, pues fué derogada por el Código penal, porque con sus severas disposiciones es más que probable que no se llevase á cabo un lance que, á más de cubrir de luto á la nación, si succumbía el duque de Montpensier, sería un ejemplo altamente pernicioso para las demás clases de la sociedad.

Dice La Correspondencia que la circular del Sr. Rívero no se publicará hasta que todos los nuevos gobernadores estén en sus puestos.

Si la circular fuese para instrucción particular de los gobernadores, importaría poco que los gobernadores estuviesen ó no en sus puestos: lo mismo se le podía dar en Madrid que en las provincias, y aun mejor aquí que en otra parte. Si es para que se entere el público, nada tiene que ver que estén ó no en sus puestos los gobernadores; además, que se suponía que todos habrían ya tomado posesión de sus cargos.

Tanta solemnidad y tanto anuncio para salir después con un parto de los montes, como el de la combinación de gobernadores, nos parecen una soberana ridiculez.

Son curiosas, por más de un concepto, las siguientes noticias que publica La Igualdad:

«Con cierta reserva se decía ayer en los círculos políticos que probablemente, sin esperar á las auras de Abril, habrá una modificación ministerial, de cuyas resultas bajarán al panteón de los cesantes dos ó tres de los ministros actuales, y entre ellos el Sr. Figuerola, pero este señor doctor tiene para curar el ósigo de la crisis el antidoto de los empréstitos, y como hombre prevenido, está preparando los ingredientes necesarios para confeccionar un específico de los más eficaces y rescativos.

El Sr. Sagasta volvería en tal caso al ministerio de la Gobernación, decidido á probar con circulares, exarabatos y otros excesos, que Rívero no vale para él tres cominos.

Al ministerio de Estado iría el Sr. Silvela, que ha reemplazado á D. Salustiano en las intimidades de Prim, y que, sin dejar de ser á la vez unionista y conservador y revolucionario, ha sabido granjearse la estimación de los radicales, el aprecio de las Tullerías, la gratitud de las monjas y las bendiciones de los obispos.

Es corto, pero con sal y pimienta, el siguiente manifiesto que contra las quintas ha dado el comité republicano de Avila. Dice así:

[ABAJÓ LAS QUINTAS!]

Compañeros: La supresión de este odioso impuesto era una de las más grandes promesas contenidas en el «Programa» que publicaron, al desembarcar en Cádiz, los hombres de la triunfante revolución.

El pueblo, crédulo y sencillo, saludó con gritos de entusiasmo el advenimiento al poder de un gobierno, bajo cuya buena administración esperaba días de gloria y bienestar. Desgraciadamente, una vez más hemos sido vilmente engañados, y una vez más han perdido su dignidad los hombres que desde las altas esferas del poder, se olvidan tan fácilmente de los sagrados compromisos contraídos con el pueblo á quien deben su engrandecimiento.

Por un decreto del poder ejecutivo, somos llamados al servicio de las armas lo mismo que en años anteriores, y si no nos oponemos por cuantos medios está á nuestro alcance dentro de la ley, seremos soldados; es decir, que habrá algunas víctimas más que sacrificar en aras de la ambición.

Con el objeto, pues, de ponernos de acuerdo y trazar las reglas de conducta que debemos seguir en un asunto que tan de cerca nos interesa, hemos creído conveniente convocar á nuestros compañeros para una reunión, que habrá de celebrarse el día 6 del corriente, á las once de la mañana, en el local de la plaza de toros.

Creemos innecesario encañear la necesidad de la más puntual asistencia á toda la juventud, á quien cordialmente saludamos.—Avilenses: ¡Viva el pueblo soberano! ¡Abajo las quintas!—Avila 4 de marzo de 1870.

Suponemos que al leerlo, el conde de Reus pondrá la cara algo menos satisfecha que cuando prometía en mágicos programas lo que tenía seguridad de no poder cumplir.

En la sesión celebrada por los pactos federales el miércoles, se leyó la siguiente proposición:

«Los ciudadanos firmantes, á la reunión de los representantes del partido republicano federal de las provincias de España, hacen presente: que habiendo acordado hacer una manifestación pacífica contra la exacción de quintas, esperan acordar otra reunión que el domingo próximo se verifique en todas las provincias de España, invitando, como cuestión de humanidad, á todos los españoles, sea cual fuere el partido político á que pertenecan.

Salud, fraternidad y república federal.—Valladolid 6 de marzo de 1870.—Siguen las firmas.

Aprobada por la Asamblea, se acordó recomendar á las provincias el hacer una manifestación pacífica en contra de las quintas.

Dice El País: «El sábado ó domingo próximo se verificará una reunión de los individuos de la mayoría, en la que se presentará su dictamen la comisión acerca del método con que deben ser discutidas las leyes orgánicas.

Este método, según noticias, será el siguiente: Las leyes serán discutidas en totalidad y por títulos, y la votación se verificará por artículos. Cálculanse en 158 los discursos, ya en pró, ya en contra, á que darán margen.

De nuestro apreciable colega El Tiempo tomamos lo siguiente:

«Hemos oído con gran extrañeza que los excelentísimos Sres. D. Laureano Figuerola, D. Manuel Ruiz Zorrilla y el brigadier D. Juan Bautista Topete, se han negado á pagar los billetes del baile de la Beneficencia, que las señoras les mandaron y ellos no devolvieron.

A esto debemos agregar que por nuestra parte hemos oído, que el general Prim, á pesar del elevado cargo que desempeña, que debe obligarle á dar ejemplo de largueza y desprendimiento en favor de la Beneficencia pública, devolvió los billetes que se le enviaron, sin acompañar retribución alguna, como se ha hecho en casos análogos por los que desempeñaban puestos iguales ó parecidos al que hoy ocupa el conde de Reus.

En un comunicado que con ocasión de la cuestión del derribo de las Calatravas dirige á un periódico el Sr. Silvela, se leen los siguientes significativos párrafos:

«Algunos disgustos mayores que el polvo de un derribo inmediato me ha proporcionado hasta hoy, y me ha de proporcionar en adelante, el haber tomado parte activa, no obstante mi procedencia conservadora, en la gran transacción política, en virtud de la cual se ha escrito en la Constitución vigente el principio de la libertad religiosa.

Y de la misma manera que no atendí á mi conveniencia, sino á las más altas consideraciones de proclamar el principio de la libertad de cultos, con igual desinterés, con no menos honrado propósito reclamé ayer su aplicación clarísima á un templo edificado, rectamente administrado por católicos, que se obligan á mantenerle abierto sin subvención del Estado.

Cualquiera diría que el Sr. Silvela está poco menos que arrepentido de esa gran transacción y de sus desastrosas consecuencias.

Un periódico entre ministerial y republicano viene burlándose en su último número, y no sabemos si insultando á las muchas señoras que han pedido por las monjas Calatravas, y pregunta que dónde estaban esas señoras cuando los fusilamientos de Junio de 1866.

Nosotros sabemos dónde estaban esas señoras en la época que se cita, y vamos á decirlo al coleto: estaban en sus casas, poseídas del verdadero horror que inspiraron á todo Madrid los asesinatos del cuartel de San Gil y otros delitos de esta especie.

Por lo demás, si el colega desea saber dónde se hallan los fusiladores, sin esforzarse mucho puede encontrarlos unidos en estrecho consorcio con los promovedores de aquellos horribles y sangrientos sucesos.

Los Sres. Suarez Inclán, Calderón Herce y García Gómez, presentaron ayer tarde la renuncia de individuos de la comisión de actas, á consecuencia del incidente ocurrido ayer en la discusión de las de Vich, en que no ha podido presentarse un documento, por ignorarse su paradero.

¿Quién haría desaparecer este documento? Por honra de los diputados, suponemos que el documento en cuestión habrá sido destruido por los ratones, y esperamos que para evitar en lo sucesivo otro suceso semejante, se adoptarán las medidas necesarias para acabar con esos animales roedores.

REVISTA DE LA PRENSA.

Copiamos á continuación algunos párrafos del artículo en que nuestro ilustrado colega El Comercio de Cádiz, juzga la Memoria del general Concha:

«No nos creemos competentes, dice, ni mucho menos para juzgar la conducta militar del general Concha en aquellos lamentables acontecimientos, y precisamente las cuestiones que se abordan en la Memoria á que nos referimos son más militares que políticas; son de esas cuestiones que solo pueden tratarse con acierto por los que tengan conocimientos especiales en la materia, conocimiento de que nosotros carecemos; pero diremos, sí, que en nuestra humilde opinión la gran falta del marqués de la Habana fué haber aceptado el gobierno en circunstancias tan críticas, no teniendo, como al parecer no tenía la convicción, la fe, entusiasmo que se han menester, en momentos supremos, para pelear con enemigos poderosos y sobreponerse á dificultades gravísimas.

El marqués de la Habana dice que al admitir el cargo de presidente del Consejo de ministros no tuvo otra idea que la de cumplir con sus deberes de general, y de ningún modo la de representar principios políticos determinados.—Venía, pues, tan solo (son sus palabras) á cumplir con el deber que obliga á los militares á la defensa del soberano y á la obediencia de su gobierno.

Para eso, decimos nosotros, no se acepta un altísimo cargo político en frente de una revolución que desplega al viento su bandera y se presenta orgullosa y amenazadora. El marqués de la Habana pudo haber ofrecido su espada á la reina para servir á las órdenes de cualquiera gobierno que hubiese merecido entonces la regia confianza. Con esto quedaban dignamente cumplidos sus deberes de militar. Pero encargarse del poder en momentos tan difíciles sin llevar á la alta dirección de los negocios un pensamiento político, sin levantar con fe y energía una bandera que fuese la antítesis, la condena franca y resuelta de la bandera revolucionaria, era entrar con gran desventaja en la lucha, por cuanto se desorientaba á los leales, se animaba á los rebeldes, y se destruía la posibilidad de despertar el entusiasmo público en favor de la noble causa que el gobierno defendía.

De aquí parten, pues, todas las faltas voluntarias ó involuntarias del general Concha.

No hay más que leer su Memoria para convencerse de que el jefe del gobierno en Setiembre de 1868 era el hombre de las vacilaciones y de los términos medios entre políticas contrarias, el hombre de las conciliaciones imposibles entre enemigos declarados, el hombre que quería estar bien á un mismo tiempo, con todos los partidos, con todas las fracciones, con todos los grupos que se llamasen aunque realmente no fuesen conservadores. ¿Que había de suceder, puesto en semejantes maños el timón de la nave del Estado, en medio de una gran tempestad? Cuando más se necesitaba del arranque, de la energía, del valor que prestan la fe y el entusiasmo, era precisamente cuando el general Concha llegaba al poder con el corazón helado á todo sentimiento político, y como víctima que se inmolaba por motivos de pundonor en aras de su deber militar.

Así no se triunfa nunca en las grandes crisis de las naciones. ¿Qué extraño es que la causa del trono y del orden social quedase vencida, si el caudillo de los leales, falto de fe y casi de esperanza, lo flaba todo al éxito casual de un combate? Lo que en la Memoria del marqués de la Habana vemos perfectamente explicado, es el triunfo fácil, rápido y casi fabuloso de la revolución.

El Legitimista Español, juzgando la proposición que se dice van á presentar progresistas y cimbrios, declarando ilegal la existencia del partido carlista y subsistente la ley que dejó sin derecho á la corona de España á D. Carlos y su descendencia, se explica en estos términos:

«Cuál es el origen de esta actitud por parte de la mayoría de las Cortes? Indudablemente no es otro que las palabras pronunciadas hace pocos días por el señor Rívero. El ministro de la Gobernación afirmó entonces que la familia de D. Carlos se hallaba proscrita; que era ilegal cuanto tendiese á colocarla en el trono de España, y que el presentarla las oportunas medidas legislativas contra la organización del gran partido carlista. Esto ha debido parecer poco hábil y nada político al ministro democrático, y sus amigos, tal vez de acuerdo con él, como por regla general suelen hacerse estas cosas, se proponen iniciar lo que sin descuido personal muy fácil no podría el Sr. Rívero.

Y qué significa esta actitud del partido democrático de que es supremo jefe el actual ministro de la Gobernación? Significa que se quiere establecer la ley de razas; significa que la revolución se ha hecho solamente para los revolucionarios; significa que á los adversarios de la situación se quiere privar de todo derecho; signifi-

ca que para el gobierno, no solamente los carlistas, si que también los moderados y aun los republicanos, se hallan fuera de la ley; significa, en fin, el despotismo mayor de los despotismos, la tiranía más horrible de las tiranías. Porque es un hecho evidéntísimo que el gobierno revolucionario está solo, se halla en el vacío y vive combatido por la casi unanimidad de los españoles; lo cual demuestra plenamente que en su desvanecimiento, el gobierno aspira á conservarse por medio de la proscripción de todos los elementos sociales que no estén con él; y como estos elementos son la casi totalidad del país, por medio de la proscripción de casi todos los españoles.

Pero ¿se presentará esta proposición? ¿Será admitida? ¿Cuál debe ser la actitud del partido carlista, si tal suceso tuviera lugar? Ignoramos si los democratas, ayudados de los progresistas, llevarán á cabo su propósito. Si tal sucediese, el partido carlista, que tiene grandísima mayoría, habría sido lanzado de la esfera legal, en la que se agita y en la que únicamente desea, quiere y se propone agitar para lograr la realización de sus aspiraciones. Pero nunca más que cuando esto se verificara conviene la calma, la moderación, la prudencia. Es necesario que nuestros amigos vivan siempre muy alerta y en la persuasión de que esa proscripción puede haberse establecido para ver si por ese medio extremo, ya que por otros que se han puesto en juego nada se ha conseguido, logran el gobierno y la revolución toda lanzar al campo á los carlistas y aniquilarlos, y adquirir con ese aniquilamiento una vida de que ahora carecen.

Encierra una triste verdad, cuyas consecuencias tocan ya los amotinados en Setiembre, el artículo que publica La Esperanza sobre la cruzada que contra la Iglesia católica hacen siempre los partidos radicales. Así dice en su artículo, que lleva el epígrafe de

DÍOS LOS CIEGA.

Montpensier no acierta á ganarse la voluntad de los progresistas y democratas, y sin embargo, nada hay más fácil. Con abofetear en la calle á un obispo, habría salido del paso, y captándose para su eternidad el cariño de los radicales. Estas frases, que encierran una gran verdad, y revelan un profundo conocimiento de la fúndole y aspiraciones de los dos partidos que principalmente disponen de los destinos de la nación, se atribuye á un importante personaje político que está más cerca de Serrano que de nosotros.

En efecto: basta observar la marcha de la revolución en todos los países, y especialmente en el nuestro, para comprender que el blanco de los tiros, el objeto principal del odio de las escuelas mal llamadas radicales, es la Iglesia católica, y por ende las corporaciones creadas bajo su amparo, sus ministros y hasta sus vírgenes.

Bien claro se ha visto esto recientemente en la cuestión suscitada con motivo del suplicatorio para procesar al señor arzobispo de Santiago; bien claro se ha visto en el loco furor que se apoderó de la fracción denominada de los cimbrios al oír al Sr. Figuerola que el templo de las Calatravas se respetaría, aunque el convento se derribase.

¡Insensatos! Os proponéis arrancar en los pocos días que os quedan de mando los arraigados sentimientos religiosos del pueblo español, y solo conseguís excitáros y aumentar la odiosidad que ya os habéis granjeado. Vivis entre nosotros, os jactáis de inspiraros en la opinión de la mayoría, y encamináis todos vuestros esfuerzos á contrariarla, creando el vacío á vuestro alrededor.

Dando una prueba de que no queremos conseguir el bien por el camino del mal, desde el primer día en que os apoderasteis del poder os advertimos que caeríais bajo el peso de la maldición de este pueblo católico, y como tal, hidalgo y generoso, si os ensañabais contra la Iglesia, si ibais á estrullar contra el sentimiento religioso; si emprendíais la cruzada que teníais anunciada contra los sacerdotes del Altísimo y contra las vírgenes del Señor.

¿Cómo respondisteis á nuestras leales advertencias, á nuestras generosas súplicas? Con un imprudente reto, con un audaz reto que resonó en toda la Península é hizo estremecer indignadas á más de las tres cuartas partes de los españoles. Y la cuarta parte no completa os siguió en un principio, creyendo que, en efecto, sus males provenían de la preponderancia del clero. Un año de experiencia ha demostrado á los incautos lo contrario; y hoy, con vuestro diminuto ejército, cegados por la ira, insistís en vuestros propósitos de persecución y opresión. ¡Insensatos, cien veces insensatos!

Aun cuando los españoles no fueran católicos en su inmensa mayoría, no estarían hoy á vuestro lado. ¿Sabéis por qué? Porque intuitivamente se podrían dar parte del débil, y cubrían á la víctima, arrojándose sobre el verdugo para reducirle á la impotencia.

Y contra quienes os ensañáis en vuestro ciego furor? Contra inermes sacerdotes atenados por el hambre, contra débiles mujeres que ningún daño os han hecho, y á las que maltratais de hecho y de palabra, negándolas la escasa retribución que estais obligados á darlas á cambio de los bienes que antes se las arrebató, y de cuyo producto cobráis los pingües sueldos que alegremente gastáis, sin reparar en que el pueblo cuya representación os arrogáis comparte con ellas los mendrugos de pan de que dispone.

Hijos del pueblo os llamais, é hijos del pueblo sois, pero hijos desnaturalizados, porque qué otro nombre merecen los que, como vosotros, alimentan al pueblo con odio y declaran guerra á todas las corporaciones creadas para socorro del pueblo y formadas de la savia del pueblo? También sois españoles, porque habéis nacido en España, y sin embargo, aborrecéis sus gloriosas tradiciones, destruíis los antiguos monumentos que las simbolizan, y hasta queréis cambiar las condiciones esenciales y características de la familia española.

SECCION DE NOTICIAS.

La Gaceta de ayer publica una orden del ministerio de Hacienda dictando reglas para que los títulos del reino residentes en las provincias acrediten su derecho á usarlos, y concediendo, por equidad, dos meses de tiempo para que los que carezcan de la autorización competente la soliciten con relevación de las multas que determina el real decreto de 28 de Diciembre de 1846, concediéndose igual término y con la misma relevación para solicitar también la autorización necesaria para hacer uso en España de títulos extranjeros á los interesados que no estén comprendidos en ninguna de las excepciones que se expresan en el art. 20 del real decreto de 24 de Octubre de 1851; finalmente determina la citada orden que transcurrido el plazo fijado sin haber cumplido los interesados con estas prescripciones, se anunciará en la Gaceta la vacante de los títulos del reino, y se comunicará á los interesados y publicará también en la Gaceta la prohibición de usar los títulos extranjeros, sin perjuicio de hacer efectivas las multas que corresponda.

También publica ayer el diario oficial una orden del ministerio de la Gobernación, dictando reglas para la mejora de las cárceles de las cabezas de partidos judiciales, previo reconocimiento de los arquitectos municipales, donde los haya.

La junta de la Deuda publica anuncio en la Gaceta de ayer que los tenebrosos de las carpetas señaladas con los números 1,189 al 1,331, que comprenden todos los títulos del 3 por 100 consolidado presentados á renovar

